

## 1976: De la ruptura a la reforma

# Cambios y giros tácticos del PCE en el año decisivo de la Transición

FRANCISCO ERICE

La bibliografía existente sobre la Transición postfranquista y el papel del antifranquismo durante el proceso alcanza ya un volumen difícilmente controlable, aunque a menudo resulte repetitiva. Es bastante habitual —y en modo alguno inocente— analizar los cambios de entonces en clave personalista (subrayando el papel de los protagonistas más destacados), o bien tener en cuenta solo los factores político-institucionales. La primera opción tiende a enfatizar los juicios morales (responsabilidades, *traiciones*, aciertos o desaciertos) y a subestimar los factores colectivos o los determinantes estructurales. La segunda olvida que el franquismo era algo más que una carcasa política vacía de cualquier contenido social; ignora que se trataba de una coalición de grupos contrarrevolucionarios capaz de mantener y desarrollar una base de apoyo apreciable y no solo oligárquica.

Ciertamente, una interpretación crítica del proceso transicional no puede obviar algunas actuaciones personales (aunque siempre reabsorbiéndolas en contextos supraindividuales) o descuidar la importancia de los elementos político-institucionales. Pero debe entender el proceso de manera más amplia, como una *crisis orgánica*, que el *bloque social* que gobernó el país bajo la dictadura fue capaz de resolver apoyando una operación *reformista* capaz de impulsar cambios institucionales significativos, utilizando represión y liberalización en dosis bien medidas y aprovechando las fisuras entre sectores de la oposición para neutralizar posibles salidas más avanzadas. La parte de continuidad que esta vía permitió no fue solo político-institucional (cambio «de la ley a la ley» articulado en torno a la Corona), sino también del bloque social de poder. No conviene olvidar tampoco que el proceso no estaba prefigurado en sus detalles desde el principio, que en su cristalización final influyó de manera evidente la movilización democrática



y que la actuación de los distintos actores no fue irrelevante en el resultado final.<sup>1</sup>

## Perspectivas ante la muerte de Franco y la sucesión juancarlista

Como bien sabían los comunistas, la muerte del dictador no podía por menos que acentuar la crisis del régimen que encabezaba, pero no suponía, *per se*, la apertura del camino hacia la democracia. El *Después de Franco, ¿qué?* con el que se titulaba un libro-informe de Carrillo en 1965, era solo el llamativo rótulo que condensaba una larga reflexión sobre la salida de la dictadura que el Partido Comunista iniciaba en la década de los cincuenta, consolidaba en los sesenta y matizaba en el lustro previo a la extinción física del Caudillo. La propuesta elaborada, más allá de otros análisis sobre la naturaleza del capitalismo español que no caben en estas pocas líneas, se centraba en la búsqueda de amplias alianzas para acabar con el franquismo, caracterizado como un régimen representativo de la oligarquía monopolista con una base social reducida (en los primeros momentos, se hablaba de poco más que Franco y su *camarilla*), e implantar la democracia mediante una movilización masiva que concluiría en la huelga nacional interclasista (la Junta Democrática la denominó *acción democrática nacional* —ADN—). Esta se entendía como un levantamiento nacional pacífico, que abriría paso a un Gobierno provisional, encargado de tomar las primeras medidas democratizadoras y convocar un congreso constituyente. Se contemplaban dos posibles *salidas* para el postfranquismo: la oligárquica o continuista, conducente a una especie de «franquismo sin Franco», y la *democrática* o rupturista, con hegemonía de la clase obrera y que no conduciría de inmediato al socialismo, pero sí a una democracia avanzada con cambios sociales relevantes, habitualmente denominada «democracia política y social».<sup>2</sup>

El debate sobre este esquema, en particular acerca de la posibilidad —incluso probabilidad— de que la oligarquía pudiera aceptar formas democráticas parecidas a las del mundo capitalista occidental, tesis que defendían Fernando Claudín y Jorge Semprún en 1964 y que negaba la mayoría de la dirección del partido, condujo a la expulsión de los dos citados, si bien los hechos confirmarían una parte importante de sus análisis, algunos de los cuales

<sup>1</sup> Un detallado, complejo y sutil análisis de este proceso, en Ferrán Gallego, *El mito de la Transición: La crisis del franquismo y los orígenes de la democracia (1973-1977)*, Barcelona, Crítica, 2008.

<sup>2</sup> Francisco Erice, «Política de alianzas y movilización de masas de los comunistas españoles (1954-1977)», en J. Puigsech Farrás y G. Pala (eds.), *Las mans del PSUC. Militància*, Barcelona, Memorial Democràtic, 2017, pp.122-142.

fueron incorporados parcialmente, con posterioridad, a las tesis oficiales. Pero lo cierto es que la perspectiva general de una salida democrática pacífica pero rupturista se mantuvo a grandes rasgos hasta la muerte de Franco, incluyendo los documentos del VIII Congreso (1972) o del Manifiesto-Programa aprobado en 1975. Como veremos, el estallido de las costuras de tan *voluntarista* planteamiento se produciría precisamente tras la muerte del dictador, cuando el proyecto hizo aguas en puntos esenciales, y en palabras un poco drásticas y pomposas del historiador Emanuele Treglia, el PCE perdió una «cita con la historia» que se había imaginado como una «guerra relámpago» victoriosa a través de la ruptura.<sup>3</sup>

Entretanto, el PCE, como fuerza hegemónica del antifranquismo, contribuyó a avances importantes y, a la vez, fue matizando —aunque no lo suficiente— sus viejos esquemas tácticos. El catastrofismo inicial de los análisis y la idea del aislamiento del régimen se fueron mitigando, aunque siguiera subestimándose su arraigo social; también se moduló la idea del monolitismo de la dictadura, distinguiendo *grosso modo* «inmovilistas» de «aperturistas» dentro de la élite franquista. Y, en aras de una convergencia de fuerzas opositoras, sin la cual la movilización social y la llamada a la ruptura resultaban insuficientes, se fue moderando el programa, incluyendo la aceptación del mercado común, mientras que las invocaciones a la futura «democracia política y social» hipotéticamente resultante del fin del régimen se recluían en los documentos teóricos y en las esperanzas de la baquetada militancia, o se aplazaban *sine die*, a la vez que la «democracia» a secas que se invocaba se parecía bastante más a un régimen pluralista y parlamentario convencional como los de Europa occidental.

Entre los logros fundamentales estuvo, en todo caso, la construcción de un partido sólidamente implantado, socialmente diverso y con muchas desigualdades regionales; con una dirección que había ido renovándose, aunque mantenía un peso tal vez excesivo del exilio y sobre todo una fuerte personalización de las decisiones en la figura de su secretario general; pero, sobre todo, muy influyente en los movimientos sociales (ciudadanos, estudiantiles, culturales, etc.) y especialmente el movimiento obrero, a través de las Comisiones, verdadero ariete de la creciente agitación social. De modo que, en los últimos años de la dictadura, por utilizar la certera expresión de Carme Molinero y Pere Ysàs, se fue creando «un amplio y denso tejido democrático que poco a poco rodea, cerca, estrecha el terreno ocupado por la dictadura y va creándole una situación de asfixia». Es evidente que, antes de la muerte del dictador, el régimen se encontraba no en bancarrota, pero sí en una seria crisis que, en 1974-1975, avanzaba «a pasos agigantados»; incluso, si aceptamos las hiperbólicas caracterizaciones de Paul Preston, en octubre de 1975, vísperas de la

<sup>3</sup> Emanuele Treglia, *Fuera de las catacumbas: La política del PCE y el movimiento obrero*, Madrid, Eneida, 2012, pp. 333-334.



enfermedad terminal del Caudillo, «el mundo franquista empezaba a desintegrarse velozmente».<sup>4</sup>

Más problemática se presentaba la política de alianzas, donde los logros comunistas fueron limitados, salvo en el caso de Cataluña.<sup>5</sup> Y no precisamente por falta de voluntad de la dirección del PCE. El llamamiento al Pacto por la Libertad desde 1969, ofrecido entre otros a disidentes del propio régimen, extendía la propuesta de acuerdos casi *ad infinitum*; formulada incluso en términos tan voluntaristas como los que aparecen en un discurso de Carrillo de 1972, al hablar de una coalición de fuerzas que «pueden ir desde los sectores de la gran burguesía interesados en las libertades formales para propiciar el desarrollo neocapitalista y acercarse a la Europa del mercado común hasta las fuerzas revolucionarias de las clases obreras partidarias de la libertad como una etapa hacia la España socialista».<sup>6</sup>

En el otoño de 1975, el propio Carrillo, en la I Conferencia Nacional del Partido celebrada en París, llamaba al movimiento obrero a potenciar su «capacidad de negociación con los empresarios», huir de la «huelgomanía» sin renunciar a posiciones de fuerza, no «portugalizar» el proceso español y —expresándolo gráficamente— no confundir la ocupación de los sindicatos oficiales con la de las fábricas. La razón alegada no era evitar el desgaste las fuerzas o eludir la represión, sino permitir atraer a los empresarios hacia el «pacto político a todos los niveles», ofreciendo además lo que no se atrevía a calificar —por las connotaciones del término en la izquierda— como un «pacto social», pero sí sugiriendo que «en determinadas condiciones, la clase obrera puede tomar una actitud constructiva ante el problema de la crisis [económica]».<sup>7</sup>

El problema de las alianzas era, sin duda, nuclear, y lo fue aún más iniciando el proceso transicional. La debilidad de otras fuerzas opositoras y su miedo a ser desbordadas por el PCE y las Comisiones Obreras (hegemonizadas por el propio partido) no impidieron, en el verano de 1974, el surgimiento de la Junta Democrática, pero sí su capacidad de atracción hacia socialistas, democristianos, nacionalistas vascos y otros grupos de escasa implantación y actividad en la lucha antifranquista aunque con fuerte potencial de apoyo social

<sup>4</sup> Carme Molinero y Pere Ysàs, *De la hegemonía a la autodestrucción: El Partido Comunista de España (1956-1982)*, Barcelona, Crítica, 2017, p. 109. De los mismos autores, «España: una transición compleja y conflictiva», en C. Molinero y P. Ysàs (eds.), *De dictaduras a democracias: Portugal, España, Argentina, Chile*, Granada, Comares, 2020, pp. 71-77. Paul Preston, *El triunfo de la democracia en España: 1969-1982*, Barcelona, Plaza & Janés, 1986, pp. 88 y 99.

<sup>5</sup> Carme Molinero y Pere Ysàs, «El motor de la lluita antifranquista: la mobilització de masses i la política unitària», en J. Puigsech y G. Pala (eds.), *Les mans...*, pp. 102-120.

<sup>6</sup> Reproducido en *Mundo Obrero (MO)*, 10 de mayo de 1972.

<sup>7</sup> «Franco desaparecido: Las tareas del movimiento obrero para que el franquismo desaparezca también (Discurso del camarada Santiago CARRILLO en una conferencia de dirigentes obreros del Partido)», en *Nuestra Bandera (NB)*, n.º 82 especial, noviembre de 1975, pp. 5-37.

y electoral cuando las libertades democráticas se implantaran; con ella surgía, un año después de la Junta, la Plataforma de Convergencia Democrática. Y en cuanto a la deseada seducción a sectores del capital con el señuelo de asegurarles una cierta «paz social», difícilmente lograba que se sintieran estos concernidos por quienes, aunque fuera en sordina, seguían hablando de la futura «democracia política y social», fase previa a una ulterior de carácter socialista; y no podía evitar el vértigo que sin duda experimentaban ante una «ruptura» azarosa, sobre todo cuando las perspectivas de cambio gradual fueron consolidándose. El impulso de la movilización social, principal baza negociadora del PCE a través de su influencia en las Comisiones Obreras, entraba así en colisión con sus posibilidades de extender el pacto a las esperadas fuerzas burguesas y enfriaba cualquier entusiasmo ocasional de las mismas por la democracia a cualquier precio.

### Gobierno Arias, fracaso del continuismo e inicios del *giro realista* del PCE



93

La muerte de Franco, como cabía esperar, venía a acelerar considerablemente procesos anteriores, tanto dentro del régimen como en la oposición. La reacción inmediata del PCE fue rechazar cualquier maniobra continuista, llamar a negociar entre los dos organismos unitarios antifranquistas y pretender contactar con las Fuerzas Armadas para garantizar la salida pacífica hacia la democracia.<sup>8</sup> Con el cadáver del dictador aún caliente, el mismo día 20, Junta y Plataforma firmaban un comunicado conjunto en el que se exigía la libertad de los encarcelados y la vuelta de los exiliados, el establecimiento de las libertades, el reconocimiento de los derechos de las nacionalidades y la apertura de un proceso constituyente que contemplara la decisión sobre la forma de Estado, para lo cual se precisaba un gobierno de amplia coalición.<sup>9</sup>

Sin embargo, aunque se ironizara entonces sobre «Juan Carlos I el Breve» sugiriendo la escasa viabilidad del proceso sucesorio, el tono de esos mensajes fue moderándose paulatinamente, al igual que la machacona insistencia en la alternativa rupturista. Es cierto que todavía en enero de 1976 se seguía hablando de la «ruptura democrática» y del «Gobierno del Rey impuesto», pero a la vez se enfatizaban algunos rasgos más *tranquilizadores*. De hecho, la actitud ante el nuevo monarca evolucionaba sutilmente, y no precisamente por su primer mensaje, al que la mitología de la Transición ha convertido casi en una promesa de instauración democrática, pese a su ambigüedad y sus guiños

<sup>8</sup> Comité Ejecutivo del PCE, «Fin del verdugo, agonía del franquismo: El pueblo ha de conquistar el papel decisivo. Declaración del P.C. de España», en *MO*, 27 de octubre de 1975.

<sup>9</sup> F. Gallego, *El mito...*, pp. 288-289.

inequívocos al pasado. Tampoco, seguramente, porque el nuevo gobierno de Arias Navarro, presidente que el rey heredaba de la etapa anterior, integrara a algunos de los más conocidos reformistas de la élite franquista (Fraga, Areilza, Garrigues, Osorio), a la vez que —eso sí— reafirmaba la continuidad de la obra del Caudillo. Sí pueden haber influido, en cambio, algunos sondeos indirectos del nuevo rey en 1974 y 1975, con el fin de conocer de primera mano las posibles actitudes del PCE ante la sucesión o de solicitarle paciencia y moderación alegando las dificultades de futuros cambios cuyo sentido, por otra parte, distaba de aparecer claramente definido.<sup>10</sup>

Aunque nunca es recomendable sobrevalorar anécdotas de la *pequeña historia*, Gregorio Morán afirma que el 5 de diciembre Carrillo recibió por vía indirecta (a través de Ceausescu) un mensaje de Juan Carlos sin conocimiento de ningún otro miembro del Comité Ejecutivo; semanas más tarde, el secretario general hablaba a sus colaboradores de la posibilidad (aunque remota) de que el rey contribuyera a traer la democracia.<sup>11</sup> Más allá de la sustancialidad de estos indicios, acontecimientos posteriores confirman que algo estaba cambiando en la perspectiva rupturista del PCE (o al menos de Santiago Carrillo). Lo cierto es que, en el discurso ante dirigentes obreros ya citado, Carrillo rechazaba que Juan Carlos fuera a realizar una ruptura, pero consideraba que el monarca se encontraba ante la tesitura de romper con los ultras del régimen y acercarse a los sectores de la oligarquía más «civilizados», lo cual facilitaría la ADN.<sup>12</sup>

Lo cierto es que, en los primeros días del nuevo año, la larga declaración del Comité Ejecutivo del partido conservaba un lenguaje duro, entre otras cosas porque Arias acababa de hablar de legalizar a los partidos opositores excluyendo al PCE. Sin embargo, mostraba a la vez una sutil contención, recordando que se limitaba a reclamar las libertades del resto de Europa y que la ruptura —afirmaba— no pretendía desencadenar violencia, sino que podía limitarse a un simple decreto anulando las instituciones existentes, sin que se vieran afectadas ni las Fuerzas Armadas, ni los funcionarios del régimen, ni el sistema social. Además, ofrecía contribuir responsablemente, si se lograban las libertades, a la salida de la crisis económica.<sup>13</sup> Los rastros de la huelga nacional se iban diluyendo, al igual que las menciones críticas específicas a la monarquía y, por supuesto, la «democracia económica y social» desaparecía del horizonte inmediato.

<sup>10</sup> Véase Alfonso Pinilla García, *La legalización del PCE: La historia no contada 1974-1977*, Madrid, Alianza, 2017, pp. 27-38.

<sup>11</sup> Gregorio Morán, *Miseria, grandeza y agonía del PCE 1939-1985*, Madrid, Akal, 2017, pp. 886-887.

<sup>12</sup> «Franco desaparecido...», p. 30.

<sup>13</sup> F. Gallego, *El mito...*, pp. 341-345. «Editorial. Solo por la ruptura democrática habrá democracia en España», en *NB*, n.º 83, enero-febrero 1976, pp. 3-12.



Si hemos de creer en la apreciación de Claudín en su biografía de Carrillo, en enero de 1976 se inicia ya el *gran viraje* del PCE. La ADN ni se ha producido ni se producirá, y el régimen parece mantener su solidez tras la desaparición de su fundador.<sup>14</sup> Las explicaciones de esta inflexión que pueden barajarse van desde el reconocimiento realista de los errores previos del análisis para el postfranquismo, hasta las equivocaciones tácticas en una situación compleja y cambiante; en todo caso, las consecuencias del creciente pragmatismo y la renuncia paulatina a la confrontación social con el postfranquismo —afirma F. Gallego— irán reduciendo el espacio del partido ganado en la dura brecha de la clandestinidad y acabarán «despojando a los comunistas de un lugar visible *propio*, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista ideológico».

La política del PCE se basará, en los meses siguientes, en combinar movilización social —como elemento de presión— con la unidad de las fuerzas opositoras. Enero de 1976 y, por extensión, el primer trimestre de ese año, constituyen el ápice de la conflictividad durante todo el proceso de cambio. En enero, una oleada de huelgas en los servicios y la industria de la capital afectaron a entre 400 000 y 500 000 trabajadores. Según cifras para *consumo interno* del Ministerio de Gobernación, en el primer trimestre del año hubo en España 17 731 huelgas, con un total de 150 millones de horas de trabajo perdidas. También proliferaron, por entonces, las protestas populares y las movilizaciones ciudadanas por la amnistía, en Cataluña, el País Vasco, Madrid y otros lugares.<sup>15</sup>

La sensación de inestabilidad que este movimiento masivo generó, la dura represión gubernamental y la falta de rumbo detectable en sentido reformador erosionaron seriamente al Gobierno Arias. Algunos miembros de la clase política franquista, en parte por miedo real y en parte por sobreactuación interesada, hablaron de situación «prerrevolucionaria» o llegaron a comparar ciertos episodios con el Petrogrado de 1917. La mayoría de los historiadores actuales creen que, pese a la intensidad del fenómeno, este resultó suficiente para desbaratar el extraño *reformismo continuista* del Gobierno, pero no para provocar una ruptura.<sup>16</sup> Los dilemas reales, frente a una ruptura imposible, dada la correlación de fuerzas, deberían plantear si la reforma solo era factible tal como

<sup>14</sup> Fernando Claudín, *Santiago Carrillo: Crónica de un secretario general*, Barcelona, Planeta, 1983, p. 232.

<sup>15</sup> C. Molinero y P. Ysàs, *De la hegemonía...*, pp. 156-158. Nicolás Sartorius y Alberto Sabio, *El final de la dictadura: La conquista de la democracia en España (noviembre de 1975-junio de 1977)*, Madrid, Temas de Hoy, 2007, p. 74.

<sup>16</sup> Una interpretación discrepante, pero matizada, habla de una posible ruptura si la dirección del PC-Comisiones Obreras hubiera actuado desde tiempo antes con otra perspectiva y apoyado una huelga general en centros neurálgicos que luego podría haberse extendido. Véase Enrique González de Andrés, *¿Reforma o ruptura? Una aproximación crítica a las políticas del Partido Comunista de España entre 1973 y 1977*, Barcelona, El Viejo Topo, 2017, especialmente pp. 219-278.



se hizo, y si resultaba obligada la acelerada evolución del PCE, siempre personificado en un Carrillo omnipresente, hacia la *respetabilidad* y con una serie de concesiones políticas e ideológicas que, más allá de asumir *de facto* la derrota táctica de la Transición, preludiaban los deletéreos efectos posteriores en la estructura misma del partido.

La actitud del PCE ante la *galerna de huelgas* de enero en Madrid, a diferencia de algunas fuerzas de la izquierda radical, combinó el impulso de movilización como forma de presión política con una llamada a la negociación y la renuncia a plantear una extensión del conflicto, cual extensión en forma de mancha de aceite, hacia el horizonte de una «huelga general». Las razones, perfectamente comprensibles, eran la convicción de que la sucesión postfranquista había alterado, pero no resquebrajado al régimen y que la resistencia obrera estaba alcanzando sus límites en los centros neurálgicos y se encontraba relativamente aislada del conjunto del país. Pero también pesaba la continuidad con la política definida ya antes del estallido huelguístico y la obsesión por no asustar a sectores del antifranquismo moderado. El editorial de *Nuestra Bandera* que recogía esta movilización insistía en la ruptura democrática y en un Gobierno provisional «de reconciliación nacional», entre críticas al Gobierno Arias y elogios a la eclosión popular, pero recalaba el rechazo de la violencia, la exigencia de inclusión del PCE en el proceso democratizador y la disposición a arrimar el hombro contra la crisis, reiterando que la ruptura podría realizarse con «un simple decreto». <sup>17</sup> El propio tono se suavizaba incluso a fines de enero, en una conferencia de prensa ofrecida por representantes del PCE, alabando la «madurez política» y el ejemplo de «responsabilidad» de la clase obrera, especialmente el carácter pacífico de sus acciones («ni un solo acto incontrolado, ni un solo cristal roto»), evitando así «crear una situación caótica en la economía del país». <sup>18</sup>

La otra línea central de la actuación del PCE consistía en ampliar las alianzas, con llamamientos a la unión de Junta y Plataforma. Nuevos acontecimientos catalizaron este proceso y acabaron de desacreditar al Gobierno, como la matanza en Vitoria, el 3 de marzo, de cinco trabajadores al disolver la policía una asamblea obrera en una iglesia, tras meses de conflictos protagonizados por una clase obrera nueva y no hegemonizada por los activistas del PCE o las Comisiones como en Madrid. <sup>19</sup> La actitud del PCE, poco partidario de radicalizar los conflictos y más de la táctica presión-negociación, aparte de condenar los crímenes del Gobierno, lo acusaba de crear «el peligro de una situación anárquica que ninguna fuerza democrática y menos el Partido Comunista desean para España», llamando a la unión a las fuerzas opositoras y la apertura de un período constituyente. Ante el riesgo existente, el PCE proponía crear

<sup>17</sup> «Editorial: Solo por la ruptura...», ya citado.

<sup>18</sup> *MO*, 4 de febrero de 1976.

<sup>19</sup> F. Gallego, *El mito...*, pp. 361 y ss.



un solo organismo con todas las fuerzas democráticas, «capaz de negociar con las instituciones permanentes del Estado un cambio de poder, y de abrir el período constituyente que devuelva la normalidad al país y que abra a este, verdaderamente, el camino hacia Europa».<sup>20</sup>

El matiz es importante. Se abre el camino de la negociación y no se habla ya de la ADN, sino genéricamente de proseguir «la acción democrática y popular». Días más tarde, el Ejecutivo del PCE se congratulaba de la unión de Junta y Plataforma y pedía la apertura de negociaciones a los elementos reformistas y a representantes de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia, a fin de acordar un Gobierno provisional que iniciara el consabido proceso constituyente.<sup>21</sup>

Era, en definitiva, el paso a la llamada «ruptura pactada». José Sandoval, en sus memorias, achacando el cambio a la falta de voluntad combativa de los demás grupos opositores, la definía como «la expresión de la voluntad de actuar en el campo de la reforma con el espíritu de la ruptura», si bien reconocía que «era también un paso atrás».<sup>22</sup> Más ácidamente, Marcelino Camacho hablaría, también en sus memorias, de cómo la ruptura pactada era —dice— un camino «por arriba», alejado de los movimientos de masas; de la «ruptura democrática» se pasaba a la *pactada* «como sucedáneo», y luego a una «ruptura astillada» en la que «quedaron fuera muchos derechos de los trabajadores».<sup>23</sup>

Los luctuosos sucesos de marzo y la unión de los dos organismos opositores suponían el fin de una reforma postfranquista hipotecada y la división misma del campo de los *reformistas*. Ahora se imponía la necesidad de recuperar la iniciativa por parte de aquellos sectores del régimen que veían claramente que algo más significativo debía «cambiar para que todo siguiera igual», y para ello se necesitaba atraer (eso sí, desde posiciones de fuerza) a sectores de la oposición. Según relata la periodista Pilar Urbano, por estos días el rey enviaba un nuevo mensaje a Carrillo proponiéndole que los comunistas participaran en el futuro juego electoral, pero sin legalizarlos de momento, presentándose como independientes.<sup>24</sup> La última iniciativa legal del Gobierno Arias, la ley de asociaciones, defendida ante las Cortes por Adolfo Suárez, se saldaba con la paradójica aprobación de la misma y el rechazo de la reforma en el Código Penal de los artículos que permitían su aplicación. El 1 de julio se producía la forzada dimisión de Arias Navarro, y unos días más tarde Suárez juraba como nuevo presidente del Gobierno.

<sup>20</sup> «Los acontecimientos de Vitoria: Declaración del Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España», en *MO*, 11 de marzo de 1976.

<sup>21</sup> «Proposiciones del PC para resolver el problema político», en *MO*, 24 de marzo de 1976.

<sup>22</sup> José Sandoval, *Una larga caminata: Memorias de un viejo comunista*, Brenes (Sevilla), Muñoz Moya Editores Extremeños, 2006, p. 184.

<sup>23</sup> Marcelino Camacho, *Confieso que he vivido: Memorias*, Madrid, Temas de Hoy, 1990, pp. 392-393.

<sup>24</sup> Pilar Urbano, *La gran desmemoria*, Barcelona, Planeta, 2014, p. 228.



## De la ruptura pactada a la reforma

Pese a la desconfianza generada entre la oposición por su origen (Jefe Nacional del Movimiento), Suárez vino a expresar dos cambios importantes: la escisión del reformismo y un nuevo y hábil liderazgo capaz de tomar la iniciativa; y la neutralización de la oposición democrática con «negociaciones» diferenciadas y una política dosificada de palo y zanahoria, a la vez que se iniciaba la organización partidaria del reformismo de cara a futuras necesidades electorales.<sup>25</sup> Dentro del mito de la Transición, Suárez aparece como el «gran negociador», con su mezcla de flexibilidad y dureza, así como su capacidad para quebrar un bloque de fuerzas opositoras que, en todo caso, estaba ya plagado de contradicciones e intereses contrapuestos. En realidad, la idea de «negociación», igual que las de «reforma pactada» o «ruptura pactada», encajan bien en el mito de «cambio consensuado», que la propia izquierda —como veremos— también ha cultivado. A la vez, la oposición acentuaba su pragmatismo y crecían los deseos de cada fuerza de buscar la mejor situación propia a la salida del régimen.<sup>26</sup>



98

En realidad, el éxito de la reforma de Suárez implicaba un cambio de escenario que, siguiendo las líneas anteriores, acaba de consolidarse en los últimos meses del año. Las movilizaciones del primer período de la reforma se atenuaron considerablemente (con la excepción concreta del 12 de noviembre) y la política pasó a centrarse en los contactos por arriba, entre organizaciones o con representantes gubernamentales. Ya en plena crisis del primer Gobierno reformista, el Ejecutivo del PCE hablaba de pactar la ruptura con el Ejército, la Iglesia y los banqueros, fórmula de la que se burlaba con razón Gregorio Morán y que Fontana, en unas reflexiones hechas entre su doble condición de historiador y protagonista-militante, adjudica, como lo de la «ruptura pactada», a «la fértil inventiva verbal de Carrillo».<sup>27</sup>

Del 28 al 31 de julio, el PCE celebraba reunión de su Comité Central en Roma, al no ser autorizado (al contrario que el Congreso de UGT) en España. Allí, además de la puesta en escena de su dirección, cambios en el modelo organizativo con la generalización de las agrupaciones y otros asuntos, Carrillo hacía gala de sus recientes credenciales «eurocomunistas» y de su independencia de la URSS; pero también recordaba las consabidas condiciones para aceptar el proceso (amnistía, Gobierno provisional...), sin por ello dejar de hacer

<sup>25</sup> F. Gallego, *El mito...*, pp. 411-599.

<sup>26</sup> Bénédicte André-Bazzana, *Mitos y mentiras de la Transición*, Barcelona, El Viejo Topo, 2006, pp. 30-52.

<sup>27</sup> G. Morán, *Miseria...*, p. 906. Josep Fontana, «Los comunistas en el final de la dictadura», en M. Bueno Lluch y S. Gálvez Biesca (eds.), *Nosotros los comunistas: Memoria, identidad e historia social*, Madrid-Sevilla, FIM-Atrapasueños, 2010, p. 408.

guiños a la monarquía, admitiendo el «aplazamiento» del debate sobre la forma de Estado si el rey propiciaba el pacto entre oposición y poder, y reconociendo que la declaración del nuevo Gobierno parecía alentadora.<sup>28</sup> De los importantes efectos del cambio organizativo no es el momento de hablar, pero la percepción de la cronista áulica de la Transición Victoria Prego era que se había producido «un cambio radical en el talante público del PCE y nunca más se volverán a escuchar desde sus filas sus tradicionales proclamas revolucionarias».<sup>29</sup>

Esta moderación se acentúa el 28 de agosto, cuando Carrillo se entrevista con José María Armero, enviado por altas instancias del Gobierno. El secretario comunista, además de replantearle, entre otras cosas, su interés por hablar con «los militares», añade que no es necesario insistir en un Gobierno provisional o de coalición, sino que basta con que entre cuatro y cinco representantes de partidos de la oposición entren en el Gobierno ya constituido y le den condiciones de estabilidad para convocar unas cortes constituyentes.<sup>30</sup>

Las entrevistas con políticos del régimen tenían también periódicamente por interlocutores a otros dirigentes comunistas, que a veces las relatan en sus memorias (Sánchez Montero, Sandoval, Camacho), alternadas con detenciones que —ahora ya— no se prolongan muchos días. Los meses de septiembre y octubre registran una febril actividad de reuniones y reestructuraciones de los organismos opositores que resulta innecesario seguir a efectos de nuestra narración. También las salidas colectivas a la luz o entregas públicas de carnets, como parte de esa estrategia vinculada, cual elemento nuclear, a la legalización del partido.<sup>31</sup> A veces el principal dirigente comunista exhibe una retórica admonitoria cada vez menos creíble, como cuando compara el proyecto suarista con el de Berenguer, que hizo caer la monarquía.<sup>32</sup> Pero su actitud general es mesurada y negociadora, aunque se sigan invocando formas de presión para recortar la capacidad de maniobra creciente del reformismo.

En todo caso, la movilización, que oscila a la baja, contribuye poco a este recorte. El último envite de importancia será la jornada, convocada por la Coordinadora Sindical (Comisiones, UGT y USO), pero bajo el influjo de la oposición política, el día 12 de noviembre. Pese a que el Gobierno echó el resto en las presiones (más de 400 detenidos) y en la propaganda, el número de huelguistas fue importante (2,5 millones según los convocantes y medio millón según el Gobierno); pero todos coincidieron en considerar el desafío como un fracaso o un «empate» que en modo alguno ayudaba a romper la dinámica de

<sup>28</sup> G. Morán, *Miseria...*, pp. 910-915. C. Molinero y P. Ysàs, *De la hegemonía...*, pp. 170-186. Santiago Carrillo, *Memorias*, Barcelona Planeta, ed. revisada y aumentada, 2007, pp. 484-485.

<sup>29</sup> Victoria Prego, *Así se hizo la Transición*, Barcelona, Plaza & Janés, 1995, pp. 515-518.

<sup>30</sup> A. Pinilla, *La legalización...*, pp. 67-82 y 351-356.

<sup>31</sup> S. Carrillo, *Memorias...*, p. 673.

<sup>32</sup> G. Morán, *Miseria...*, pp. 921-928.



la reforma.<sup>33</sup> El día 23, se celebraba en un molino de Guadalajara el plenario del Comité Ejecutivo del PCE. Tras una larga discusión, la posición de Carrillo —como solía suceder— acabó predominando: había que jugar en el terreno de la reforma, y la lucha (ahora ya sin tapujos) tendría que concentrarse en la legalización del partido antes de las próximas elecciones. Algunos de los asistentes lo asumieron con cierto sentido de derrota; otros (como dice Sandoval), tras muchas cavilaciones y años de lucha a sus espaldas, pensaron que a lo mejor el partido necesitaba «un alto en el camino, una tregua después de treinta y muchos años de brega», y al menos Carrillo apuntaba «una salida del laberinto».<sup>34</sup> Como se diría en los documentos del IX Congreso (1978), principal aportación del PCE al mito de la Transición sin vencedores ni vencidos claros, «mantener las posiciones rupturistas en la nueva coyuntura hubiera significado aislar al PCE y a las otras fuerzas de vanguardia, debilitarlas, dejar el campo libre a la reforma» (*sic*).<sup>35</sup>

La victoria gubernamental el 15 de diciembre, en el referéndum de la Ley para la Reforma Política, con un bajo porcentaje de abstenciones, que era la postura que defendía la oposición, venía a confirmar este nuevo escenario. Lo que queda del año 76 en la trayectoria de la dirección del PCE es ya parte de la «pequeña historia»: la detención y «legalización» de Santiago Carrillo, pese a que su protagonista y algunos otros hayan hiperbolizado y convertido en épica unos episodios que, una vez más, ofrecen como principal y casi único mérito la disponibilidad y la movilización generosa de los militantes. Lo que vino después, sin duda importante y a veces duro, no fue sino resultado de lo sucedido en el año trascendental de 1976, cuando la trayectoria esencial del postfranquismo no quedó perfilada en todos sus detalles, pero sí en su resultante general definitiva.

No es este lugar para condensar un balance matizado de la Transición, toda vez que el período y las cuestiones planteadas en estas breves líneas son solo parte de un proceso más multifacético y dilatado. El año 77 fue el de la matanza de los abogados de Atocha; la «cumbre eurocomunista» en Madrid de Carrillo, Berlinguer y Marchais; la entrevista Carrillo-Suárez y la «legalización condicionada»; las primeras elecciones democráticas desde 1936 y los Pactos de la Moncloa. En los siguientes, la Constitución, las autonomías, las propuestas de política de «concentración democrática»... y la sangría y el desgarramiento del partido ofrecen un panorama complejo, necesitado de debate, y que debería huir de las descalificaciones personalizadas fáciles o de los balances autocomplacientes y la atribución de los fracasos a contextos ajenos y desarrollos inevitables.

<sup>33</sup> E. Treglia, *Fuera de las catacumbas...*, pp. 334-357.

<sup>34</sup> José Sandoval, *Una larga caminata...*, pp. 164-165.

<sup>35</sup> *Noveno congreso del Partido Comunista de España, 19-23 abril de 1968*, Barcelona, Crítica, 1978, p. 53.



Quizás —y este es uno de los argumentos que se han manejado que me parece más plausible— haber admitido que la ruptura no era posible no implicaba necesariamente acumular renuncias a tan bajo precio; y, sobre todo, presentar una derrota táctica basada en estimaciones equivocadas como una victoria a medias o hasta un triunfo, y aprovechar lo conseguido —que tampoco era despreciable— y reubicar al partido en mejores condiciones para hacer posible lo que no lo había sido en el momento clave de ese cambio que hemos dado en llamar, con mayúsculas, Transición.<sup>36</sup> ★



---

<sup>36</sup> A estos efectos, recomiendo las reflexiones de Ferrán Gallego y los análisis de Juan Antonio Andrade Blanco en *El PCE y el PSOE en (la) transición: La evolución ideológica de izquierda durante el proceso de cambio político*, Madrid, Siglo XXI de España, 2012, o «El PCE en (la) Transición (1975-1982)», en F. Erice (dir.), *Un siglo de comunismo en España I*, Madrid, Siglo XXI de España, 2021, pp. 257-324.